

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en el proceso ordinario laboral promovido por JOHN JAIRO HENAO RODRÍGUEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y EPM, UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS (Radicado 05001-31-05-010-2019-00348-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al abogado Kevin David Mora Rodríguez, con tarjeta profesional No. 315.218 del C.S. de la J., conforme al poder conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de invalidez entre el 5 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2019; los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones manifestó en síntesis lo siguiente: nació el 15 de enero de 1960; fue diagnosticado con “PARKINSON ESPASTICO”,

enfermedad que le impidió laborar y de la que le determinaron por parte del médico tratante una serie de incapacidades, las cuales hasta el 5 de febrero de 2019 ascendían a 740 días continuos, con concepto para esa fecha de no favorable; en comunicados de EPM (Departamento Médico) a Colpensiones, fechados el 8 de marzo y 22 de mayo de 2018, se le comunicó o remitió su caso para la evaluación de calificación de merma integral para una posible pensión de invalidez, anexándosele reporte de incapacidades y de historia clínica, con la acotación de que para dicha fecha ya había superado los 150 días de incapacidad que tenía la EPS por ley para remitir; las entidades obligadas le cancelaron las incapacidades hasta el 15 de julio de 2017, de esta fecha en adelante, o sea del 16 de julio de 2017 hasta el 10 de julio de 2018, y las correspondientes a los períodos del 8 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019, no fueron pagadas, equivalente a 537 días continuos; realizó la reclamación ante Colpensiones de las citadas incapacidades mediante carta radicada el 2 de enero de 2019, respecto de la cual la entidad mediante comunicación del 22 de febrero de 2019, le requirió unos documentos con el fin de darle trámite, los cuales se adjuntaron; luego Colpensiones emite respuesta indicando que no era procedente el reconocimiento por el concepto desfavorable de rehabilitación emitido por la EPS, y que debía iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, siendo que la misma entidad ya la había determinado mediante DML: 4743 del 26 de julio de 2018, con fecha de estructuración del 5 de julio de 2018; el 15 de abril de 2019 emite un nuevo comunicado reiterando lo ya indicado; el 26 de julio de 2018, Colpensiones emite dictamen de pérdida de capacidad de invalidez No. DML-4743, en el que determina un porcentaje del 88.31%, y con fecha de estructuración el 5 de julio de 2018; el 29 de agosto de 2019 solicita ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la misma que fue resuelta de manera positiva por la entidad mediante la Resolución SUB13307, notificada el 4 de febrero de 2019, en la que le reconocen la pensión de invalidez a corte de nómina, desconociendo la fecha de estructuración y aduciendo que gozaba del subsidio por incapacidad temporal, los cuales no fueron pagados, indagando razones técnicas de ingreso de incapacidades por parte de EPM DEPARTAMENTO MEDICO, y más gravoso es que en la liquidación final de prestaciones sociales emitida por EPM, estos se descuentan de la misma lo correspondiente a dichas incapacidades.

Colpensiones dio respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. Dijo que eran ciertos la mayoría de los hechos, señalando que no le constaban los de la enfermedad y el trámite para la reclamación del pago de las incapacidades. Propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la solicitada prestación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación e imposibilidad de la condena en costas.

Por su parte, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., atendió igualmente de manera oportuna la demanda, señalando que la entidad ha sido vinculada al proceso en calidad de prestadora en servicios de salud al demandante, lo que hace a través de la Entidad Adaptada en Salud -EAS de EPM- autorizada por la ley, describiendo en detalle la naturaleza de la EAS. Sobre los hechos indicó que eran ciertos los de la fecha de nacimiento del actor, la enfermedad padecida, las comunicaciones dirigidas a Colpensiones, el pago de las incapacidades hasta el 15 de julio de 2017 y el descuento del pago de incapacidades que se le hizo al demandante en su liquidación definitiva. Negó las que hacen referencia al derecho pretendido. De los demás dijo que no le constaban. Formuló como excepción previa la de falta de agotamiento de la vía administrativa. De mérito propuso las de inexistencia de la obligación a cargo de EAS de EPM - Carencia de objeto, falta de legitimación en la causa, cumplimiento de todas las obligaciones por parte de la entidad adaptada en salud de EPM, improcedencia del recobro solicitado por el demandante, subrogación total del riesgo pensional, pago, incompatibilidad pago mesadas pensionales e incapacidades, buena fe, prescripción, no procedencia de la condena en costas contra EPM.

En la primera audiencia celebrada por el juzgado de conocimiento, que lo es el Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el 22 de febrero de 2020, resolvió declarar probada la excepción previa de falta de reclamación administrativa formulada por EPM y, en consecuencia, declaró oficiosamente probada la de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por la entidad como perentoria.

Luego de cumplido el trámite correspondiente, el mismo juzgado, mediante sentencia del 2 de agosto de 2022, condenó a Colpensiones a pagarle al señor Jhon Jairo Henao Rodríguez la suma de \$24.107.464 por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez, causado entre el 21 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2019, monto sobre el cual se autorizan los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud. Así mismo, condenó a la entidad a reconocerle y pagarle al demandante los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados sobre el importe de las mesadas que componen el retroactivo pensional a partir del 30 de diciembre de 2018 y hasta la fecha en que se satisfaga la obligación. Le impuso las costas a Colpensiones, fijándole como agencias en derecho la suma de \$1.500.000.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación la apoderada de Colpensiones, manifestando su disenso frente a la condena por los intereses moratorios, trayendo como sustento posturas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la SL11897 de 2016, en el sentido de que la entidad no reconoció el derecho desde la fecha de estructuración en tanto no contaba con la certificación del pago del subsidio de incapacidad en los términos de ley, por lo que no se pudo llevar a cabo un estudio exhaustivo y con ello reconocer la prestación desde la fecha de estructuración, por lo que concluye diciendo que la entidad no negó el derecho de manera caprichosa sino en cumplimiento de la ley.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la apoderada recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y, de ser el caso, las demás condenas impuestas a la entidad en el grado de consulta de conformidad con el criterio expresado por la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y en la sentencia con radicado 40200 del 9 de junio de 2015.

En esta instancia no existe discusión respecto a que Colpensiones mediante la Resolución SUB 13307 del 18 de enero de 2019, le reconoció al señor John Jairo Henao Rodríguez la pensión de invalidez a partir del 1° de febrero de 2019, en cuantía de \$3.394.535, ingresada en la nómina de 2019/02 que se paga en 2019/03. Tampoco se discute que para dicho reconocimiento la entidad tuvo en cuenta un dictamen que le realizó al actor el 26 de julio de 2018, mediante el cual le determinó una pérdida de capacidad laboral del 88.31%, con fecha de estructuración el 5 de julio de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico que compete a esta Sala de Decisión resolver consiste en establecer si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de la fecha de la estructuración, que lo fue el 5 de julio de 2018 y, de ser el caso, se analizará la procedencia de los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*; a su vez, el artículo 10 del Decreto 758 de 1990 respecto de la pensión de invalidez por riesgo común indica que *“...cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”*, por lo que los pagos que por incapacidades se hayan realizado luego de la fecha de estructuración podrán ser descontados del retroactivo en caso de reconocerse la pensión de invalidez desde tal data, por cuanto ambas prestaciones resultan completamente incompatibles dado que cubren o protegen la imposibilidad de la persona de prestar sus servicios, a más de que ambas parten de la misma contingencia, la afectación de la salud del individuo, lo que implica que solo deba reconocerse una sola de las prestaciones.

Frente a la obligación de quienes están encargados de cumplir con el pago del subsidio por incapacidad, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, específicamente señala:

“Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.

Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto”

Al respecto se tiene que, analizadas las diferentes probanzas obrantes al interior del plenario, se evidencia que el inicio de las incapacidades de manera consecutiva por parte del señor John Jairo Henao Rodríguez datan del 24 de enero de 2017, circunstancia que conlleva a que los primeros 180 días se cumplan el 20 de julio del mismo año, incapacidades estas que fueron pagadas por la Unidad de Servicios Médicos de EPM, tal como lo refiere el actor en su escrito de demanda. A partir de esta última fecha y hasta el 20 de julio de 2018, sigue el período de 360 días de incapacidad a cargo de Colpensiones como administradora a la que estaba afiliado el actor, teniendo en cuenta que por parte de la Empresa Adaptada en Salud de las Empresas Públicas de Medellín, le fue enviada comunicación el 3 de mayo de 2017 en la que indican que el señor Henao Rodríguez tiene pronóstico favorable y que al 26 de mayo de 2017 cumple 123 días continuos de incapacidad, condición esta que fue

reiterada en comunicaciones del 10 y 31 de julio de 2017 y que fue modificada a partir del oficio enviado el 24 de agosto de 2017, en la que le informan a Colpensiones que el pronóstico de recuperación no es favorable, y así confirmado en sendos documentos enviados por parte de EPM y recibidos por Colpensiones; terminado dicho período, esto es, hasta el 20 de julio de 2018, retoma la obligación nuevamente la Empresa Adaptada en Salud de las Empresas Públicas de Medellín del pago de los subsidios de incapacidad, conforme lo dispone la Ley 1753 de 2015.

Figura igualmente en el plenario, certificación de la “*Vicepresidencia Talento Humano y Desarrollo Organizacional UNIDAD COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS*” de EPM, en la que indican que inicialmente le reconocieron al señor John Jairo Henao Rodríguez los auxilios por incapacidad entre el 23 de julio de 2017 y 20 de julio de 2018, período de tiempo que corresponde entre los 180 y 540 días de incapacidad, el cual recaía por ley para su cancelación a Colpensiones, por lo que EPM al momento de hacerle la liquidación definitiva a su trabajador por el reconocimiento de la pensión de invalidez, descontó dichos pagos en la suma de \$23.970.000.

Así mismo, la parte actora allega con la demanda un documento que describe en el acápite de pruebas como “*Copia de las respectivas incapacidades, radicadas con relación emitida por EPM departamento Medico..*”, la cual tiene como registro de emisión “*2018/12/18*”, detallando cada período de incapacidad y como estado refiere cuales tienen la condición de “*PAGADA*”, destacándose tal condición entre el 24 de enero de 2017 y el 15 de julio de igual año, que corresponde a los primeros 180 días, y luego reinicia igual estado a partir de las incapacidades entre el 11 de julio de 2018 y el 7 de noviembre siguiente, para después señalar frente al periodo de incapacidad “*2018/11/08 - 2018/12/07*”, como “*CALCULADA*”, y para el período “*2018/12/08/ - 2019/01/06*”, como “*GENERADA*”; no obstante, en la respuesta a la demanda por parte de EPM, adjunta el mismo certificado solo que ya aparece como fecha de emisión “*2019/04/25*”, y en los estados registra como “*PAGADA*”, las incapacidades generadas entre el **11 de julio de 2018 y el 5 de febrero de 2019**, período este que como se indicó anteriormente corresponde nuevamente el pago a la EPS del afiliado, y que va incluso hasta un poco

después del inicio del pago de la pensión de invalidez del actor, que lo fue a partir del 1° de febrero de 2019.

De igual manera se avizora de la Resolución SUB 13307 del 18 de enero de 2019, mediante la cual Colpensiones le reconoce al demandante la pensión de invalidez, que el motivo para pagarle la pensión con corte a nómina es porque el *“...certificado expedido por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN incapacidades por cotizante del 18 de diciembre de 2018, no cumple con los requisitos que exige la norma, cuando son impresos por internet, como lo es la firma digital”*, lo que resultaba apenas lógico por cuanto eran coincidentes la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral con la obligación por parte de la Empresa Adaptada en Salud de las Empresas Públicas de Medellín del pago del subsidio por incapacidad, lo que da lugar a la revocatoria de la sentencia en tanto, de un lado, se entiende que al habersele exigido al actor en la Resolución SUB 13307 del 18 de enero de 2019, por medio de la cual se le reconoció al demandante la pensión de invalidez, que el retroactivo se le reconocería siempre y cuando aportara certificación de su EPS que no había recibido subsidios por incapacidad temporal, así debió de haber procedido, pero de las pruebas arrimadas al plenario se advierte que no cumplió con tal exigencia, la cual por cierto estaba a su alcance dada la naturaleza de la prueba y a que era éste quien sabía y conocía a que EPS se encontraba afiliado, y del otro, quedó demostrado el pago de las incapacidades hasta la fecha del reconocimiento de la pensión de invalidez, las cuales incluso fueron señaladas por las EPM al sustentar la excepción de pago.

Por tanto, se repite, el fallo de primer grado se habrá de revocar en cuanto al retroactivo ordenado, y consecuentemente los intereses moratorios y las costas. Estas últimas, en la primera instancia, estarán a cargo de la parte demandante y a favor de Colpensiones; y en ésta, no se impondrán dada la manera como se llegó a la decisión.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por


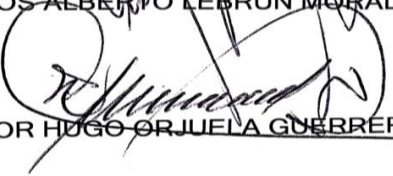
autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor JOHN JAIRO HENAO RODRÍGUEZ, con c.c. #71.581.183.

Las costas de la primera instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Colpensiones. Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en ESTRADOS.

Se cierra la audiencia, y se deja constancia de las personas que en ella intervinieron.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501020190034801
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	JOHN JAIRO HENAO RODRIGUEZ
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	29/06/2023
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 30/06/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario